

EXPEDIENTE: RR.SIP.1718/2013	Roberto Sánchez Villaseñor	FECHA RESOLUCIÓN: 18/diciembre/2013
Ente Obligado: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal		
MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por la respuesta emitida por el Ente Obligado.		
<p>SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Ente Obligado y se le ordena que emita otra en los términos siguientes:</p> <p>Informe al ahora recurrente el número de convivencias y de entregas/regreso de menores programadas por la autoridad judicial, así como el número de éstas que hayan sido canceladas y suspendidas y las que estén o hayan estado activas o vigentes en el periodo requerido en el Centro de Convivencia Familiar supervisada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.</p>		

Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

RECURSO DE REVISIÓN

RECURRENTE:

ROBERTO SÁNCHEZ VILLASEÑOR

ENTE OBLIGADO:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

EXPEDIENTE: RR.SIP.1718/2013

En México, Distrito Federal, a dieciocho de diciembre de dos mil trece.

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número **RR.SIP.1718/2013**, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Sánchez Villaseñor, en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes:

R E S U L T A N D O S

I. El trece de septiembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “**INFOMEX**”, mediante la solicitud de información con folio 6000000109513, el particular requirió en **medio electrónico gratuito**:

“ ...

Se solicita al Centro de Convivencia Familiar Supervisada proporcione el número de registros atendidos por los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2013. conforme a los siguiente:

Número total de Registros dados de alta en el año.

Número total de Registros dados de baja en el año, así como la razón de su baja.

Número total de Registros Activos en el año.

de manera separada por los conceptos de ‘convivencia supervisada’, así como de ‘entrega y regreso de menor’.

Lo anterior para fines estadísticos.

Datos para facilitar su localización

Entiéndase por ‘Registro’ a cada una de las convivencias y entregas que por orden judicial se programan en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y que éste les asigna un número específico.” (sic)

II. Mediante el oficio P/DIP/2852/2013 del treinta de septiembre de dos mil trece, notificado al particular en la misma fecha a través del sistema electrónico “**INFOMEX**”, el Ente Obligado comunicó al solicitante la ampliación del plazo para responder la

solicitud de información, en términos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

III. Mediante el oficio P/DIP/2983/2013 del catorce de octubre de dos mil trece, notificado al particular en la misma fecha a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al solicitante la siguiente respuesta a la solicitud de información, la cual señalaba:

“... me permito informarle que en este Centro sólo se realizan programaciones, cancelaciones y suspensiones conforme a los Artículos 12 y 13 del Reglamento que Fija las Bases de Organización y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, que dicen:

Artículo 8.- Las convivencias, entrega o regreso de menor y evaluaciones psicológicas, se llevarán a cabo dentro del horario a que se refiere el artículo 6 del presente reglamento. La Autoridad Judicial competente determinará las fechas y horarios de las convivencias y entrega o regreso de menor, debiendo sujetarse para ordenarlas, a la disponibilidad de espacios, recursos y horarios que previamente le informe el Centro, mediante solicitud de horarios disponibles realizada por medio de oficio, lo anterior con el fin de no rebasar la capacidad instalada, lo cual pondría en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. En caso de existir sobrecupo de convivencias y entrega o regreso de menor en los horarios determinados por la autoridad judicial ordenadora, las autoridades del Centro remitirán oficio a las Autoridades Judiciales del conocimiento, a efecto de sugerir días y horarios disponibles para la realización de éstas.

De no existir días y horarios disponibles para convivencias y entrega o regreso de menor las autoridades del Centro colocarán las convivencias y entrega o regreso de menor solicitadas por las Autoridades Judiciales en una lista de espera, las cuales se darán de alta conforme exista espacio en el Centro, lo anterior se hará del conocimiento de la autoridad ordenadora mediante oficio de estilo.

La Subdirección de Evaluación Psicológica informará a la Autoridad Judicial el día y la hora en que deberán presentarse las personas requeridas por dicha autoridad para la realización de la evaluación psicológica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del presente Reglamento.



Artículo 12.- Los servicios prestados por el Centro de convivencias, entrega o regreso de menor concluirán con el procedimiento judicial, ya sea por sentencia ejecutoriada o por convenio judicial, de conformidad con el numeral 941-Ter del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, o bien habiendo transcurrido dos años de duración, aún cuando las mismas hayan comenzado como convivencia y después hayan cambiado a entrega o regreso de menor o viceversa. Solamente en casos excepcionales, previa determinación de la Autoridad Judicial, contando en su caso, para ello, con la opinión del Centro y una valoración psicológica podría extenderse dicho periodo por un lapso mayor que no exceda de un año.

Artículo 13.- Son motivo de cancelación de las convivencias, entrega o regreso de menor, cuando:

I. La Autoridad Judicial así lo establezca.

II. El procedimiento legal haya concluido, debiendo la Autoridad Judicial informar esto mediante el oficio correspondiente al Centro, o bien hayan transcurrido dos años de duración, de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento;

III. Durante un periodo consecutivo de dos meses o más, no se presente ninguna de las partes, solo se presente una de las partes participantes en una convivencia, entrega o regreso de menor, o el menor se rehúse consecutivamente a convivir con el padre que no tiene la guarda y custodia, previo oficio que se gire a la Autoridad Judicial que haya ordenado las convivencias, entrega o regreso de menor, a efecto de que en un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que se recibió el mismo, determine sobre la continuidad o suspensión de éstas tomando en cuenta los antecedentes del caso o la existencia de causa justificada, pudiendo el Centro reprogramar y sólo por una ocasión más las convivencias y entrega o regreso de menor, de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento;

IV. Mediante peritaje o evaluación en materia de sanidad mental, expedida por el Sistema Nacional de Salud o Institución acreditada, se tenga conocimiento oficial de que alguno de los usuarios del Centro, tenga algún tipo de padecimiento, por medio del cual se determine que la persona no sea apta para permanecer dentro del Centro y participar en alguna convivencia, entrega o regreso de menor. Lo anterior será hecho del conocimiento de la Autoridad Judicial competente, en donde se le solicite la cancelación de la convivencia, tomando en consideración el interés superior del menor; y

V. Los asistentes violen alguna disposición contenida en el presente Reglamento.

Quando se presente alguno de los motivos de cancelación de las convivencias, entrega o regreso de menor, las Autoridades del Centro lo harán del conocimiento de la Autoridad Judicial mediante oficio o acta, según corresponda

No omito señalar que la información solicitada respecto a los Registros que usted nombra con los conceptos de Alta de y/o Baja, corresponde a Jueces y Magistrados, quienes detentan esa facultad.”

Con base en el pronunciamiento emitido por el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, se transcribe a continuación el párrafo cuarto del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra indica:

[Transcribe disposición referida].

En efecto, es oportuno precisar a usted que en los diversos registros oficiales que se realizan de los múltiples asuntos que se solventan en este H. Tribunal, **no se contempla un rubro en el que se consigne para efectos estadísticos, la información solicitada respecto a los Registros que usted nombra con los conceptos de Alta y/o Baja.**

Por consiguiente, para obtener la información que desea, **tendrían que revisarse físicamente la totalidad de los expedientes ingresados en los juzgados y salas familiares durante el periodo que usted señala, para indagar en los mismos si es que la autoridad judicial ordenó convivencias, entregas o regresos de menores y evaluaciones psicológicas. Una vez identificados, indagar en los mismos para extraer los datos de su interés. Después, obtenidos éstos, clasificarlos y elaborar entonces la relación cuantitativa correspondiente.** Estas acciones en su conjunto implicarían realizar un procesamiento de datos elaborado ex profeso, es decir, sistematizar una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario específico. Procesamiento que este H. Tribunal se encuentra impedido para realizar, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, transcrito anteriormente.

Ahora bien, respecto a “**programaciones, cancelaciones y suspensiones**”, el Centro de Convivencia Familiar Supervisada proporcionó información en cuatro hojas, mismas que se encuentran a su disposición en el domicilio de esta Dirección de Información Pública, ubicada **en Aven. Niños Héroes Núm. 132, P. B. Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 hrs., y los viernes de 9:00 a 14:00 hrs.**

Si usted desea copia simple de las hojas antes mencionadas, deberá pagar previamente a su entrega la cantidad de **\$1.00** por cada copia, conforme al Artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con relación al artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal. En este sentido, las cuentas bancarias en las que usted puede realizar su pago son las siguientes:

Banco:

Santander S. A.
HSBC, S. A.
BBVA – Bancomer, S. A.
BANAMEX, S. A.

Núm. de Cuenta:

65502542046
4005129507
0448407029
2442151450

*Asimismo, usted debe entregar el original del recibo de pago en el domicilio de esta Dirección, ubicado en el domicilio arriba citado, a efecto de que se le proporcionen las copias simples de referencia.
...” (sic)*

IV. El treinta de octubre de dos mil trece, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la solicitud de información, indicando como único agravio lo siguiente:

*“... si se hace un análisis de los cuadros que tuvo a bien proporcionar el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y que a continuación transcribo fielmente sólo uno de ellos, el llamado **‘REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y CANCELACIÓN DE ENTREGAS DE MENOR ORDENADAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL POR EL AÑO EN PLAZA JUAREZ’**, y que puede ser cotejado con el anexo al presente, **tomando como base sólo el año 2009 para ejemplificar** se puede extraer lo siguiente:*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Programación de Entregas de Menor	203	194	266	196	179	143
Cancelación de Entregas de Menor ordenadas por la Autoridad Judicial	86	89	87	45	39	14
Registros Activos	11	16	49	62	98	127

***HASTA EL 31 DE AGOSTO**

- 1. En el Concepto ‘Programación de Entregas de Menor’ por lo que corresponde al año 2009, dice que fueron ‘programadas’ solo 194, entonces esta cifra no corresponde a lo que reportó el Centro de Convivencia en ese mismo año a la Dirección de Estadística de la Presidencia, donde reportó que se programaron 22,946.**
- 2. Si, 194 sólo fueron los registros dados de Alta en el año 2009, y se le restan los 89 que fueron por Cancelación Ordenada por la Autoridad Judicial, nos resultan 105 Registros Activos, no así los 16 que reportan en el cuadro en cuestión.**



3. Si para el año 2010, se tenían 16 Registros Activos, más las 266 'Programación de Entregas de Menor', nos da un resultado de 282, Registros, menos las 87 Cancelaciones por la Autoridad Judicial, resulta 195 Registros Activos y no 49 como lo reportan. Y así sucesivamente.

4. Si para el año 2009, se tuvieron 16 Registros Activos, ¿De cuántas personas se conforma cada Registro Activo?, ya que lo que reportó el Centro de Convivencia en ese mismo año a la Dirección de Estadística de la Presidencia, en lo que corresponde al Aforo de Usuarios, fue de 69,474 personas que ingresaron al servicio en ambos Centros (Río de la Plata y Plaza Juárez), si esa cantidad la dividimos entre 2, nos resulta 34,737 usuarios que ingresan sólo en Plaza Juárez aproximadamente. Si hacemos una división entre 34,737 personas que ingresan al servicio, por los 16 Registros Activos en el año, nos da un resultado de 2,171.06 personas que integran cada Registro Activo. SITUACIÓN QUE ES FALSA OBVIAMENTE

Dichas situaciones se reflejan en los Tres Cuadros que presentó el Centro de Convivencia al suscrito, y lo que deja ver es la ALTERACIÓN, FALSEDAD Y MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, por parte de la Responsable del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, en virtud de que se contradice con lo que reportó esa área a la Dirección de Estadística y quedó registrado en el Informe Anual del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los mismos años. Esto se puede comprobar visitando la página www.poderjudicialdf.gob.mx, Dirección de Estadística, Informe anual 2008, página 13. Informe anual 2009, inciso f). Informe anual 2010, inciso f), páginas 31 y 32.

Todo lo anterior, deja ver:

[Que el Centro de Convivencia Familiar Supervisada] Altera la información en cuanto a la programación, ya que en los cuadros citados reporta determinadas cifras que no corresponden con la información que el mismo Centro entrega a la Dirección de Estadística y en los informes Anuales del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

..." (sic)

Asimismo, al recurso de revisión, el particular anexó diversas documentales a efecto de acreditar sus consideraciones.

V. El cuatro de noviembre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico "INFOMEX" a la solicitud de información con folio 6000000109513.



Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado.

VI. Mediante un correo electrónico del seis de noviembre de dos mil trece, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el recurrente remitió un escrito a través del cual manifestó su oposición a que sus datos personales fueran divulgados.

VII. El ocho de noviembre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente, oponiéndose a la divulgación de sus datos personales.

VIII. Mediante el oficio P/DIP/3305/2013 del trece de noviembre de dos mil trece, suscrito por la Directora de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, a través del cual expuso lo siguiente:

- El agravio del recurrente era inoperante porque pretendía introducir argumentos novedosos al presente recurso de revisión, que no fueron materia de la solicitud de información, lo cual colocaba al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en un estado de indefensión y, por lo tanto, no podían atenderse, sino desecharse.
- El recurrente realizó pronunciamientos y apreciaciones personales, meramente subjetivas y juicios de valor respecto a un hecho que implicaba imputaciones que no constituían información generada en términos de lo establecido en el artículo 4, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.



- En caso de que el recurrente tuviera conocimiento de actos o circunstancias, presumiblemente, susceptibles de queja o denuncia, podía acudir al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para presentarla, bajo protesta de decir verdad.
- Si bien los artículos 12 y 13 del Reglamento que fija las Bases de Organización y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada establece los supuestos en los que una convivencia o entrega de menor puede generar suspensiones o cancelaciones (“*Bajas*”), lo cierto era que el Centro era un área auxiliadora de la Administración de Justicia y bajo dicha potestad sólo le competía ejecutar las órdenes de los Jueces Familiares, esto es, programar registros de convivencias o entregas de menor (“*dar de alta*”) y suspender o cancelar registros de convivencias o entregas de menor (“*dar de baja*”), sólo cuando expresamente el Juez de lo Familiar mediante oficio lo ordenara a dicho Centro.
- Con la segunda respuesta, emitida por la Encargada de Despacho del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Ente Obligado, podía apreciarse que la solicitud de información fue respondida categóricamente en su totalidad, en atención a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad.
- Con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el presente recurso de revisión debía sobreseerse.

Asimismo, al informe de ley, la Encargada del Despacho de la Dirección de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal anexó diversas documentales para acreditar sus consideraciones, entre las cuales destacaba el oficio TSJ-CCFS.DIR.RP.NO.1026 del ocho de noviembre de dos mil trece, a través del cual el Ente Obligado emitió una segunda respuesta, la cual indicaba:

“ ...

Primero. [...] mediante este escrito en mi carácter de encargada de despacho de este Centro, de conformidad al acuerdo 72-46/2013, con efectos a partir del día 23 de octubre del presente año, siendo que de acuerdo a la información solicitada por el peticionario es la siguiente:

Centro de Convivencia Río de la Plata	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal para su programación o "dada de Alta"	235	188	216	207	300	179
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial para su Cancelación, Suspensión o "datos de baja"	111	111	98	74	79	61
Registros vigentes o "Activos" en el transcurso del año ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal	659	550	521	486	573	547

Centro de Convivencia Plaza Juárez	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal para su programación o "dada de Alta"	101	162	188	147	98	126

Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial para su Cancelación, Suspensión o " <u>datos de baja</u> "	56	64	62	43	27	9
Registros vigentes o " <u>Activos</u> " en el transcurso del año ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal	100	244	354	375	279	272

Centro de Convivencia Plaza Juárez	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal para su programación o " <u>dada de Alta</u> "	204	196	266	196	179	143
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial para su Cancelación, Suspensión o " <u>datos de baja</u> "	86	89	87	45	39	14
Registros vigentes o " <u>Activos</u> " en el transcurso del año ordenadas por la	486	503	621	512	476	446



Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal						
--	--	--	--	--	--	--

...

Por lo que con base a su solicitud se proporcionaron los datos solicitados, esto es por cada Registro de Convivencia y Entrega de menor programada o 'datos de alta', cancelados, suspendidos o 'datos de baja' y 'activos' o vigentes, pues cada orden de la Autoridad Familiar del Distrito Federal genera la Programación o "**Alta**", la cancelación, suspensión o "**Baja**" de REGISTROS de convivencias y entregas de menor, datos que ciertamente no coinciden, puesto que no fueron materia de la solicitud del peticionario, considerando que dichas cifras contemplan el número de convivencias programadas anualmente y que derivan de cada uno de los REGISTROS de convivencia y entrega de menor que se tienen vigentes o "activos" en el año y no representan las "**Altas**".

Tercero. Respecto a los hechos marcado con los numerales 2 y 3, es importante precisar que efectivamente la resta de los REGISTROS cancelados, Suspendidos o 'datos de baja' a los REGISTROS programados o 'datos de alta' no darán como resultado los REGISTROS Vigentes o 'activos', considerando que a lo largo de cada año en algún momento estuvieron vigentes o 'activos' los registros cancelados, suspendidos o 'datos de baja'.

Cuarto. En relación al Hecho marcado con los numeral 4, se aclara que las cantidades a que hace referencia el peticionario no fueron materia de la solicitud.

Quinto. Tocante a las manifestaciones vertidas por el C. Roberto Sánchez Villaseñor en su escrito, me permito informar que este Centro de Convivencia opera de acuerdo a la normatividad vigente, sin embargo, el ocursoante tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que considere pertinente de tener alguna inconformidad al respecto del servicio que se le pueda dar o se le haya dado respecto de Convivencias o Entregas de Menor.

Sexto. Lo que se comunica es con la información con que se cuanta en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
..." (sic)

IX. El quince de noviembre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el informe de ley



que le fue requerido, así como con una segunda respuesta y admitió las pruebas ofrecidas.

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta rendidos por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

X. El tres de diciembre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley y la segunda respuesta rendidos por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.

XI. Mediante el oficio P/DIP/3479/2013 del seis de diciembre de dos mil trece, el Subdirector de Información Pública del Ente Obligado formuló sus alegatos, en los cuales ratificó todo lo expuesto en el informe de ley.

XII. El once de diciembre de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró



precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior.

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,



atento a lo establecido por la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala:

Registro No. 168387

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVIII, Diciembre de 2008

Página: 242

Tesis: 2a./J. 186/2008

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que **las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público**, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia **subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante**, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación.

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García.

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.



Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.

Sin embargo, el trece de noviembre de dos mil trece, la Encargada del Despacho de la Dirección de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió y notificó al ahora recurrente una segunda respuesta a la solicitud de información, con la cual resulta procedente estudiar la causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual establece que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando durante su sustanciación se reúnen los siguientes tres requisitos:

- a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud.
- b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante.
- c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Ahora bien, para determinar si la segunda respuesta cumple con el **primero** de los elementos de procedencia previstos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe tenerse en cuenta que el requerimiento del ahora recurrente consistió en lo siguiente:

“ ...

Se solicita al Centro de Convivencia Familiar Supervisada proporcione el número de registros atendidos por los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2013. conforme a los siguiente:



Número total de Registros dados de alta en el año.

Número total de Registros dados de baja en el año, así como la razón de su baja.

Número total de Registros Activos en el año.

de manera separada por los conceptos de 'convivencia supervisada', así como de 'entrega y regreso de menor'.

Lo anterior para fines estadísticos.

Datos para facilitar su localización

Entiéndase por 'Registro' a cada una de las convivencias y entregas que por orden judicial se programan en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y que éste les asigna un número específico." (sic)

Asimismo, a la solicitud de información el Ente Obligado respondió lo descrito en el Resultando III de la presente resolución y en los anexos al recurso de revisión, que se tiene por inserto a la letra.

En ese orden de ideas, en contra de dicha respuesta, el ahora recurrente se inconformó como se describe en el Resultando IV de la presente resolución, destacándose fundamentalmente que su inconformidad radicaba en que la información proporcionada no correspondía con la estadística judicial y con los informes de labores de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicados en su portal de Internet, así como que la diferencia entre las programaciones de entregas de menor y de convivencias familiares y las cancelaciones o suspensiones de las mismas no daba como resultado el número de registros activos dado a conocer por el Ente recurrido en la respuesta impugnada.

En ese sentido, en la segunda respuesta, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal informó lo siguiente:

"...

Primero. [...] mediante este escrito en mi carácter de encargada de despacho de este Centro, de conformidad al acuerdo 72-46/2013, con efectos a partir del día 23 de octubre

del presente año, siendo que de acuerdo a la información solicitada por el peticionario es la siguiente:

Centro de Convivencia Río de la Plata	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal para su programación o " dada de Alta "	235	188	216	207	300	179
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial para su Cancelación, Suspensión o " dados de baja "	111	111	98	74	79	61
Registros vigentes o " Activos " en el transcurso del año ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal	659	550	521	486	573	547

Centro de Convivencia Plaza Juárez	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal para su programación o " dada de Alta "	101	162	188	147	98	126
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial para su Cancelación, Suspensión o " dados de baja "	56	64	62	43	27	9
Registros vigentes o " Activos " en el	100	244	354	375	279	272

transcurso del año ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal						
---	--	--	--	--	--	--

Centro de Convivencia Plaza Juárez	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal para su programación o <u>“dados de Alta”</u>	204	196	266	196	179	143
Registros de Convivencias Familiares Supervisadas ordenadas por la Autoridad Judicial para su Cancelación, Suspensión o <u>“dados de baja”</u>	86	89	87	45	39	14
Registros vigentes o <u>“Activos”</u> en el transcurso del año ordenadas por la Autoridad Judicial Familiar del Distrito Federal	486	503	621	512	476	446

...

Por lo que con base a su solicitud se proporcionaron los datos solicitados, esto es por cada Registro de Convivencia y Entrega de menor programada o ‘dados de alta’, cancelados, suspendidos o ‘dados de baja’ y ‘activos’ o vigentes, pues cada orden de la Autoridad Familiar del Distrito Federal genera la Programación o **“Alta”**, la cancelación, suspensión o **“Baja”** de REGISTROS de convivencias y entregas de menor, datos que ciertamente no coinciden, puesto que no fueron materia de la solicitud del peticionario, considerando que dichas cifras contemplan el número de convivencias programadas anualmente y que derivan de cada uno de los REGISTROS de convivencia y entrega de menor que se tienen vigentes o “activos” en el año y no representan las **“Altas”**.

Tercero. Respecto a los hechos marcado con los numerales 2 y 3, es importante precisar que efectivamente la resta de los REGISTROS cancelados, Suspendidos o ‘dados de baja’ a los REGISTROS programados o ‘dados de alta’ no darán como resultado los REGISTROS Vigentes o ‘activos’, considerando que a lo largo de cada año en algún



momento estuvieron vigentes o ‘activos’ los registros cancelados, suspendidos o ‘dados de baja’.

Cuarto. *En relación al Hecho marcado con los numeral 4, se aclara que las cantidades a que hace referencia el peticionario no fueron materia de la solicitud.*

Quinto. *Tocante a las manifestaciones vertidas por el C. Roberto Sánchez Villaseñor en su escrito, me permito informar que este Centro de Convivencia opera de acuerdo a la normatividad vigente, sin embargo, el ocursoante tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que considere pertinente de tener alguna inconformidad al respecto del servicio que se le pueda dar o se le haya dado respecto de Convivencias o Entregas de Menor.*

Sexto. *Lo que se comunica es con la información con que se cuanta en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
...” (sic)*

Ahora bien, con vista en la segunda respuesta, este Órgano Colegiado advierte que la misma no cumple con el **primero** de los elementos de procedencia previstos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en primer lugar, porque si bien el Ente Obligado varió la información relativa al número de registros programados (dados de alta), cancelados o suspendidos (dados de baja), y activos de las convivencias supervisadas y de las entregas o regreso de menor respecto al proporcionado en la respuesta impugnada, y subrayó que dicho número no correspondía con el dado a conocer en los informes de labores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicados en el portal de Internet de dicho Ente, porque éste no fue un requerimiento del particular y porque, además, dicho número no representaba las altas, lo cierto es que el Ente Obligado previno que la información solicitada por el ahora recurrente no era el número de registros de convivencias y entregas/regreso de menores ordenadas por los Jueces y Magistrados en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sino el **número de convivencias y entregas/regreso de menores programadas por**

orden judicial y que se llevaron a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce y del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil trece, como se desprende de la solicitud de información, en donde el solicitante precisó *“Entiéndase por ‘Registro’ a cada una de las convivencias y entregas que por orden judicial se programan en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y éste les asigna un número específico”*.

Lo anterior, tiene fundamento en lo establecido en los artículos 8, párrafo segundo, 9, párrafos primero y segundo, 15, 39 y 59, párrafo primero del Reglamento que fija las Bases y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, los cuales a la letra disponen lo siguiente:

Artículo 8. ...

...

La Autoridad Judicial competente determinará las fechas y horarios de las convivencias y entrega o regreso de menor, debiendo sujetarse para ordenarlas, a la disponibilidad de espacios, recursos y horarios que previamente le informe el Centro, mediante solicitud de horarios disponibles realizada por medio de oficio, lo anterior con el fin de no rebasar la capacidad instalada, lo cual pondría en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. En caso de existir sobrecupo de convivencias y entrega o regreso de menor en los horarios determinados por la autoridad judicial ordenadora, las autoridades del Centro remitirán oficio a las Autoridades Judiciales del conocimiento, a efecto de sugerir días y horarios disponibles para la realización de éstas.

...

Artículo 9. Los servicios prestados por el Centro de convivencias, entrega o regreso de menor y evaluaciones psicológicas solo se podrán llevar a cabo, **previa recepción de la orden Judicial que se haga por escrito a éste**.

El oficio girado por la Autoridad Judicial que ordene convivencias y entrega o regreso de menor deberá señalar el rubro de referencia, nombre de la persona o personas que tendrán la convivencia, entrega o regreso de menor, nombre del o los menores, **día y hora en que se efectuará la convivencia, entrega o regreso de menor**, nombre de la persona autorizada para presentar y recoger al menor, así como los

nombres de los terceros emergentes y como anexo copia certificada de las identificaciones oficiales de estos últimos.

...

Artículo 15. *Podrán ingresar a las instalaciones donde el Centro presta sus servicios de convivencias, entrega o regreso de menor y evaluaciones psicológicas, aquellas personas específicamente autorizadas por la Autoridad Judicial competente que presenten identificación oficial vigente, y cumplan con las fechas y horarios establecidos por dicha Autoridad, acatando en todo momento el procedimiento de registro y las reglas de seguridad establecidas para ello. Lo anterior de conformidad con los artículos 18, 19 y 77 de este ordenamiento.*

Artículo 39. *Quien tenga la guarda y custodia de los menores deberá presentarse con ellos a las convivencias puntualmente en los horarios y fechas determinados por la Autoridad Judicial, de conformidad con el artículo 15 de este Reglamento.*

Artículo 59. *Los padres o tutores de los menores deberán presentarse con ellos en el Centro de forma puntual en las fechas y horarios determinados por la Autoridad Judicial para las entregas de menor. Si cualquiera de las partes después de transcurridos treinta minutos de la hora fijada no se presentaran, el Centro no está obligado a prestar el servicio, ni se permitirá a las partes quedarse dentro de las instalaciones.*

...

De los preceptos legales transcritos, se desprende que es válido afirmar que la información requerida por el ahora recurrente en su solicitud de información era la relativa al número de convivencias supervisadas y de entregas/regreso de menor que **materialmente se llevaron a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada en los días y en el horario determinado por los Jueces y Magistrados** en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce y del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil trece, así como al número de éstas que fueron canceladas y suspendidas y las que estuvieron o estaban activas, pues en virtud de que los Jueces y Magistrados son quienes programan (en coordinación con el Centro), las convivencias y entregas/regreso de menores, como lo establece el artículo 8, párrafo segundo del Reglamento que fija las Bases y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar



Supervisada y que, a su vez, en términos de lo establecido en los artículos 10, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, son los únicos con atribuciones para cancelar o suspender las convivencias y las entregas/regreso de menores por las causales expresamente previstas, evidentemente, no puede sostenerse que la información a la que el ahora recurrente solicitó acceso fuera el número de **órdenes** de la autoridad judicial para que las partes en un procedimiento jurisdiccional en materia familiar se sometiera al régimen de visitas y convivencias en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, como equivocadamente lo entendió el Ente Obligado al emitir la segunda respuesta.

Ahora bien, los artículos en cita disponen lo siguiente:

Artículo 10. Una vez programadas las convivencias, entrega o regreso de menor, **por ningún motivo el personal del Centro podrá modificar unilateralmente las fechas y horarios establecidos por las Autoridades Judiciales** para la realización de las mismas, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Para las evaluaciones psicológicas se procederá conforme al artículo 66 del presente ordenamiento.

Asimismo, tampoco los padres podrán hacer cambios de horarios para extender su convivencia, entrega o regreso de menor fijado por la Autoridad Judicial, en el entendido de que no podrán iniciar ésta antes de la hora señalada ni recoger a los menores después del horario fijado para hacerlo.

Artículo 13. Son motivo de ***cancelación de las convivencias, entrega o regreso de menor, cuando:***

I. La Autoridad Judicial así lo establezca.

II. El procedimiento legal haya concluido, debiendo la Autoridad Judicial informar ésto mediante el oficio correspondiente al Centro, o bien hayan transcurrido dos años de duración, de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento;

III. Durante un periodo consecutivo de dos meses o más, no se presente ninguna de las partes, solo se presente una de las partes participantes en una convivencia, entrega o regreso de menor, o el menor se rehúse consecutivamente a convivir con el padre que no tiene la guarda y custodia, ***previo oficio que se gire a la Autoridad Judicial que haya***



ordenado las convivencias, entrega o regreso de menor, a efecto de que en un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que se recibió el mismo, **determine sobre la continuidad o suspensión de éstas** tomando en cuenta los antecedentes del caso o la existencia de causa justificada, pudiendo el Centro reprogramar y sólo por una ocasión más las convivencias y entrega o regreso de menor, de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento;

IV. Mediante peritaje o evaluación en materia de sanidad mental, expedida por el Sistema Nacional de Salud o Institución acreditada, se tenga conocimiento oficial de que alguno de los usuarios del Centro, tenga algún tipo de padecimiento, por medio del cual se determine que la persona no sea apta para permanecer dentro del Centro y participar en alguna convivencia, entrega o regreso de menor. Lo anterior **será hecho del conocimiento de la Autoridad Judicial competente, en donde se le solicite la cancelación de la convivencia**, tomando en consideración el interés superior del menor; y

V. Los asistentes violen alguna disposición contenida en el presente Reglamento.

Cuando se presente alguno de los motivos de cancelación de las convivencias, entrega o regreso de menor, las Autoridades del Centro **lo harán del conocimiento de la Autoridad Judicial mediante oficio o acta, según corresponda**.

Artículo 14. Son causa de **suspensión de las convivencias, entrega o regreso de menor, las siguientes:**

I. Se presente caso fortuito o fuerza mayor;

II. Exista la ausencia del menor o de la persona autorizada con quien se hubiere ordenado la convivencia, entrega o regreso de menor durante los primeros treinta minutos después de la hora señalada por la Autoridad Judicial para el inicio de éstas;

III. Cuando al momento de presentarse los padres o menores, padezcan algún tipo de enfermedad contagiosa, no se permitirá la celebración de la convivencia programada para esa fecha, previa razón que de lo anterior se asiente en el reporte respectivo. Las convivencias deberán reanudarse cuando lo ordene la Autoridad Judicial;

IV. Cuando cualquiera de los participantes de las convivencias, entrega o regreso de menor o evaluaciones psicológicas, realicen conductas agresivas o violentas que alteren el orden y la tranquilidad de las personas dentro del Centro. En caso de llegar a darse alguno de estos comportamientos, las Autoridades del Centro enviarán acta informativa de los hechos a la Autoridad Judicial para que determine lo conducente, atendiendo a lo señalado por los artículos 29 y 85 del presente ordenamiento;

V. Cuando cualquiera de los usuarios del Centro con su comportamiento falte al respeto al personal que labora en éste;

VI. En caso de que los menores ante la presencia del Trabajador Social, expresen su inquietud de no querer participar en la convivencia, entrega o regreso de menor, y lo informen verbalmente al padre con quien se tenga ésta, o bien cuando el personal técnico detecte previa valoración, que el menor no quiere o se resiste a convivir con el padre con el que se llevará a cabo cualquiera de éstas, se suspenderá y ambos se deberán retirar; y

VII. Los menores sean presentados en el Centro para el desarrollo de la convivencia, entrega o regreso de menor por alguna persona que no este autorizada por la Autoridad Judicial para ello.

Las Autoridades del Centro determinarán la existencia de alguna de estas causas de suspensión. Asimismo, estas autoridades en caso de presentarse la situación prevista en la fracción VI del presente artículo, harán entrega del menor al padre o tutor que tiene la guarda y custodia o a las personas autorizadas por la Autoridad Judicial para ello, de conformidad con el artículo 23 del presente Reglamento.

*Cuando se presente alguno de los motivos de suspensión de las convivencias, entrega o regreso de menor, las Autoridades del Centro **lo harán del conocimiento de la Autoridad Judicial mediante oficio o acta, según corresponda.***

Ahora bien, se afirma lo anterior porque lo requerido por el particular en la solicitud de información tiene correspondencia con lo establecido en los artículos 8, párrafo segundo, 9, párrafos primero y segundo, 15, 39 y 59, párrafo primero del Reglamento que Fija las Bases y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, en cuanto a que al solicitar el número de registros de convivencias y de entregas/regreso de menores “*atendidos*” en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece (del uno de enero al treinta y uno de agosto), **el ahora recurrente se refirió al número de convivencias y de entregas/regreso de menores programas por los Jueces y Magistrados y que se llevaron a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada en los días y en el horario determinado por la autoridad judicial**, por lo que no debe suponerse (dado que no haya dato alguno que así lo permita), que la información a la que el solicitó su acceso



sea la relativa al número de asuntos en los que la autoridad jurisdiccional ordenó a las partes en el procedimiento someterse al régimen de visitas y convivencia en dicho Centro.

Lo anterior, no podría ser de otra manera si se considera que al solicitar el ahora recurrente el número de convivencias y de entrega/regreso de menores que habían sido “*dadas de baja*”, es decir, canceladas y suspendidas, en virtud de que estas cancelaciones y suspensiones son una atribución de los Jueces y Magistrados en términos de lo establecido en los artículos 10, 13 y 14 del Reglamento que Fija las Bases y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, por lo que no habría elemento alguno para sostener que dicho acto (cancelación o suspensión), es solamente respecto a la orden dictada por el Juez o Magistrado en un determinado procedimiento para que las partes se sometieran al respectivo régimen de visitas y convivencias. Por ello, debe enfatizarse que la información solicitada es respecto a la programación de la convivencia y entrega/regreso de menor integrada por el Juez o Magistrado en coordinación con el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, en términos de lo establecido en el artículo 8, párrafo segundo del Reglamento citado.

Lo anteriormente expuesto, se constata con lo establecido en el artículo 26, fracciones I y II del Reglamento que Fija las Bases de Organización y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, el cual establece lo siguiente:

Artículo 26 *En las convivencias y/o entrega o regreso de menor los Trabajadores Sociales realizarán las siguientes actividades:*

*I. Asegurar que las convivencias y entrega o regreso de menor **se den conforme a la orden de la Autoridad Judicial** y según lo convenido, con una actitud de neutralidad hacia las partes en conflicto;*

*II. Supervisar y **llevar un registro de las convivencias y entrega o regreso de menor**;*

...



Ahora bien, a esa disposición normativa debe sumarse la atribución de la Dirección del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, establecida en el Manual Administrativo de dicho Centro, consistente en *“Coordinar la calendarización de visitas de convivencia, vigilando la programación de horarios de los trabajadores sociales”*.

De igual forma, es importante hacer referencia al procedimiento que rige la práctica de las convivencias y de entrega/regreso de menores, previsto en el Manual Administrativo de Procedimientos del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, del cual se destaca que el Centro cuenta con una **libreta de bitácora**, en la cual registra las veces en las que las partes asisten (conforme a la programación ordenada por el Juez o Magistrado y a la calendarización), a las respectivas convivencias y entregas/regreso de menores y con **formatos de Reporte de Convivencia Familiar y de Reporte de Entrega/Regreso de menor**, los cuales requisitan las partes y lo entregan a la recepción del Centro, quien a su vez lo entrega al Trabajador Social para su entrega a la Subdirección Administrativa o a la Subdirección Jurídica, la cual se encargará de remitirlo al Juez o Sala en materia familiar para dejar constancia e informar a la autoridad jurisdiccional del cumplimiento de la orden judicial.

Lo anterior, **es suficiente para asegurar que el ahora recurrente solicitó conocer el número de convivencias y entregas/regreso de menores que fueron programadas en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece (del uno de enero al treinta y uno de agosto), conforme al calendario disponible en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, así como a las cancelaciones o suspensiones de las mismas que se hayan presentado en dichos años, no así al número de órdenes por cada uno de los procedimientos jurisdiccionales sometidos a la consideración del Juez o Magistrado en materia familiar, como lo entendió el Ente recurrido.**



En ese sentido, la segunda respuesta en estudio no cumple con el requerimiento del particular, puesto que la información entregada no es a la que solicitó su acceso, ya que lo que el Ente recurrido entregó al ahora recurrente en dicha respuesta es el número de órdenes de convivencia y de entregas/regreso de menores registradas en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece (del uno de enero al treinta y uno de agosto), así como el número de órdenes que fueron canceladas y suspendidas, como se desprende de lo dicho por la Encargada del Despacho de la Dirección de Información Pública del Ente Obligado en el segundo punto del oficio P/DIP/3304/2013: *“... se proporcionaron los datos solicitados, esto es por cada Registro de Convivencia y Entrega de menor programada o ‘datos de alta’, cancelados, suspendidos o ‘datos de baja’ y ‘activos’ o vigentes, pues cada orden de la Autoridad Familiar del Distrito Federal genera la Programación o “Alta”, la cancelación, suspensión o “Baja” de REGISTROS de convivencias y entregas de menor, datos que ciertamente no coinciden, puesto que no fueron materia de la solicitud del peticionario, considerando que dichas cifras contemplan el número de convivencias programadas anualmente y que derivan de cada uno de los REGISTROS de convivencia y entrega de menor que se tienen vigentes o “activos” en el año y no representan las “Altas”.*

De igual forma, por cuanto hace a lo señalado por el recurrente en su agravio respecto a que la diferencia entre el número de convivencias y de entregas/regreso de menores y el número de éstas que fueron canceladas y suspendidas no daba como resultado el número de convivencias y de entregas/regreso de menores “activas” que fue dado a conocer por el Ente recurrido, debe decirse que en la segunda respuesta el Ente Obligado señaló que *“efectivamente la resta de los REGISTROS cancelados, Suspendidos o ‘datos de baja’ a los REGISTROS programados o ‘datos de alta’ no darán como resultado los REGISTROS Vigentes o ‘activos’, considerando que a lo largo de cada año en algún momento estuvieron vigentes o ‘activos’ los registros cancelados,*



suspendidos o ‘datos de baja’, pronunciamiento que no resuelve la inconformidad del ahora recurrente, puesto que el mismo no provee certeza jurídica respecto al número de convivencias y de entregas/regreso de menores activas en los años de interés del particular, ya que el decir que la diferencia entre las programadas y las canceladas y suspendidas no daba como resultado las convivencias y entregas/regreso de menor activas porque aquellas en algún momento estuvieron vigentes, y no era información verificable ni inteligible con la cual el solicitante pueda conocer con certeza cuál era el número de convivencias y entregas/regreso de menores activas en los años referidos en la solicitud de información y, por el contrario, ese pronunciamiento es confuso y con el mismo no puede inducirse con certeza la información que le interesa conocer al ahora recurrente, máxime si el Ente Obligado, como lo hizo, no emitió su pronunciamiento en términos comprensibles en lo que respecta al hecho de que en virtud de que en algún momento las convivencias y entregas/regreso de menores estuvieron vigentes, su diferencia con las que sí lo estuvieron no da como resultado el número de convivencias y de entregas/regreso de menores activas o vigentes.

De lo anterior, la segunda respuesta no es suficiente para tener por cumplido el requerimiento del ahora recurrente ni el **primero** de los elementos de procedencia previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de revisión.

Por lo anterior, se desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado en el informe de ley, pues al no cumplirse el **primero** de los elementos de procedencia para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta jurídicamente innecesario el estudio de los demás, pues es suficiente con que uno de ellos no se cumpla para que no sea procedente resolver, en consecuencia, toda



vez que al ser un asunto de orden público, una causal de improcedencia y de sobreseimiento debe estar plenamente acreditada conforme en los términos que disponga la norma, como lo es el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, por lo que si la hipótesis normativa no se actualiza (como en el presente caso), la causal en estudio debe desestimarse y, por lo tanto, debe procederse al estudio de fondo de los agravios formulados por el recurrente en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado.

En consecuencia, sin haber impedimento para ello, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación.

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente.

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos:

SOLICITUD DE INFORMACIÓN	RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO	AGRAVIO
<p><i>“... número de registros atendidos por los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y del 01 de enero al 31 de agosto de 2013. conforme a los siguiente:</i></p> <p><i>Número total de Registros dados de alta en el año.</i></p> <p><i>Número total de Registros dados de baja en el año, así como la razón de su baja.</i></p> <p><i>Número total de Registros Activos en el año.</i></p> <p><i>de manera separada por los conceptos de ‘convivencia supervisada’, así como de ‘entrega y regreso de menor’.</i></p> <p><i>Lo anterior para fines estadísticos.</i></p> <p>Datos para facilitar su localización</p> <p><i>Entiéndase por ‘Registro’ a cada una de las convivencias y entregas que por orden judicial se programan en el Centro de Convivencia Familiar</i></p>	<p><i>La descrita en el Resultando III de esta resolución y en el anexo al recurso de revisión exhibido por el ahora recurrente, de donde se desprende que el Ente Obligado informó al particular que lo que denomina como número de registros de convivencias y de entregas/regreso de menores “dadas de alta” es, normativamente, el registro de <u>programaciones</u> ordenadas por la autoridad judicial y que lo que denomina como número de registros de convivencias y de entregas/regreso de menores “dadas de baja”, normativamente, son las convivencias y entregas/regreso de menores <u>canceladas y suspendidas</u>.</i></p> <p><i>Asimismo, proporcionó tablas que reflejan lo descrito en el párrafo anterior,</i></p>	<p>Los descritos en el Resultando IV de la presente resolución, en donde el recurrente expuso, fundamentalmente, que la información proporcionada era falsa y que fue alterada y manipulada porque no correspondía con la que fue dada a conocer en los informes de labores de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en la estadística judicial, publicados en el portal de Internet del Ente recurrido, además de que la diferencia entre los registros de convivencia y de entregas/regreso de menores programados y los cancelados y suspendidos no daba como resultado el número de registros activos que fue dado a conocer por el Ente Obligado en la respuesta impugnada.</p>



Supervisada, y que éste les asigna un número específico". (sic)		
---	--	--

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública" con folio 6000000109513, del oficio P/DIP/2983/2013 y anexo que lo integra, y del correo electrónico del treinta de octubre de dos mil trece, a través del cual el recurrente interpuso el presente recurso de revisión, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:

Registro No. 163972

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Agosto de 2010

Página: 2332

Tesis: I.5o.C.134 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que **la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia**, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial



y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es determinar si con la respuesta impugnada el Ente obligado contravino principios y disposiciones normativas que hacen operante el acceso a la información pública y si, en consecuencia, transgredió ese derecho del ahora recurrente.

En ese sentido, con vista en el agravio formulado por la recurrente, se advierte que no manifestó inconformidad alguna en contra de la omisión del Ente Obligado de informarle la razón por la cual el registro de convivencias y de entregas/regreso de menores fueron dados de baja, es decir, suspendidos o cancelados, por lo que al no haber impugnado dicho aspecto, debe entenderse que consintió tácitamente dicha omisión y que la misma no le causa perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:

Época: Novena Época

Registro: 204707

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

*TipoTesis: **Jurisprudencia***

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo II, Agosto de 1995

Materia(s): Común

Tesis: VI.2o. J/21

Pag. 291



ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. *Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.*

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

De ese modo, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la determinación final que emita este Instituto será en torno, únicamente, a la inconformidad del recurrente respecto a que, a su juicio, el Ente Obligado le entregó información falsa, alterada y manipulada porque no correspondía con la que estaba publicada en su portal de Internet, en lo que se refería a los informes de labores de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la estadística judicial.

Ahora bien, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por el recurrente deberá revisarse, conforme a la naturaleza jurídica de la información solicitada si dicha respuesta es acorde y congruente con el requerimiento del ahora recurrente, así como si corresponde a lo que el Ente recurrido tiene publicado en su portal de Internet, para lo cual es necesario y procedente retomar lo determinado por este Instituto en el Considerando Segundo de la presente resolución, en cuanto a que la información a la que el particular requirió acceso era la relativa al **número de**



convivencias y entregas/regreso de menores programadas por orden judicial y que se llevaron a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil trece, así como al número de éstas que fueron “*dadas de baja*” (canceladas o suspendidas), y al número de activas o vigentes en esos años, como se desprende de la solicitud de información, en donde el solicitante precisó “*Entiéndase por ‘Registro’ a cada una de las convivencias y entregas que por orden judicial se programan en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y éste les asigna un número específico*”, no así al número de registros de convivencias y entregas/regreso de menores ordenadas por los Jueces y Magistrados en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por cada asunto jurisdiccional sometido a su conocimiento, como se advierte que equivocadamente lo estimó el Ente recurrido al dar respuesta a la solicitud.

Lo anterior, conlleva a este Instituto a sostener que la información entregada como respuesta por el Ente Obligado al ahora recurrente no es, en estricto sentido, a la que el particular requirió acceso, puesto que de la valoración de la respuesta impugnada se advierte que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entregó datos relativos al número de convivencias y de entregas/regreso de menores ordenadas, canceladas y suspendidas por cada asunto tramitado ante un Juzgado o Sala en materia familiar, no así a las que materialmente fueron programadas conforme al calendario de disponibilidad de cupo del Centro de Convivencia Familiar Supervisada y, en su caso, canceladas o suspendidas en los términos establecidos en los artículos 8, párrafo segundo, 9, párrafos primero y segundo, 15, 39 y 59, párrafo primero del Reglamento que Fija las Bases y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 8. ...

La Autoridad Judicial competente determinará las fechas y horarios de las convivencias y entrega o regreso de menor, debiendo sujetarse para ordenarlas, a la disponibilidad de espacios, recursos y horarios que previamente le informe el Centro, mediante solicitud de horarios disponibles realizada por medio de oficio, lo anterior con el fin de no rebasar la capacidad instalada, lo cual pondría en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. En caso de existir sobrecupo de convivencias y entrega o regreso de menor en los horarios determinados por la autoridad judicial ordenadora, las autoridades del Centro remitirán oficio a las Autoridades Judiciales del conocimiento, a efecto de sugerir días y horarios disponibles para la realización de éstas.

...

Artículo 9. Los servicios prestados por el Centro de convivencias, entrega o regreso de menor y evaluaciones psicológicas solo se podrán llevar a cabo, **previa recepción de la orden Judicial que se haga por escrito a éste.**

El oficio girado por la Autoridad Judicial que ordene convivencias y entrega o regreso de menor deberá señalar el rubro de referencia, nombre de la persona o personas que tendrán la convivencia, entrega o regreso de menor, nombre del o los menores, **día y hora en que se efectuará la convivencia, entrega o regreso de menor,** nombre de la persona autorizada para presentar y recoger al menor, así como los nombres de los terceros emergentes y como anexo copia certificada de las identificaciones oficiales de estos últimos.

...

Artículo 15. Podrán ingresar a las instalaciones donde el Centro presta sus servicios de convivencias, entrega o regreso de menor y evaluaciones psicológicas, aquellas **personas específicamente autorizadas por la Autoridad Judicial competente** que presenten identificación oficial vigente, y cumplan con **las fechas y horarios establecidos por dicha Autoridad,** acatando en todo momento el procedimiento de registro y las reglas de seguridad establecidas para ello. Lo anterior de conformidad con los artículos 18, 19 y 77 de este ordenamiento.

Artículo 39. Quien tenga la guarda y custodia de los menores deberá presentarse con ellos a las convivencias puntualmente **en los horarios y fechas determinados por la Autoridad Judicial,** de conformidad con el artículo 15 de este Reglamento.

Artículo 59. Los padres o tutores de los menores deberán presentarse con ellos en el Centro de forma puntual en **las fechas y horarios determinados por la Autoridad Judicial** para las entregas de menor. Si cualquiera de las partes después de transcurridos treinta minutos de la hora fijada no se presentaran, el Centro no está obligado a prestar el servicio, ni se permitirá a las partes quedarse dentro de las instalaciones.

...



Precisado lo anterior, es importante subrayar que una vez revisada la información publicada por el Ente Obligado en su portal de Internet, relativa a los informes de labores de la Presidencia del Tribunal en dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez (a los que a manera de ejemplo se refirió el ahora recurrente para demostrar que la información que le fue entregada era distinta a la que el Ente Obligado dio a conocer respecto al número de programaciones de convivencias y de entregas/regreso de menores), se advierte que, por ejemplo, los datos publicados por el Ente recurrido son notoriamente distintos a los que le dio a conocer al particular como respuesta a la solicitud de información, ya que en el dos mil ocho, en el respectivo informe de labores el Ente dio a conocer que se programaron 20,867 (veinte mil ochocientos sesenta y siete) convivencias y 23,205 (veintitrés mil doscientos cinco) entregas/regreso de menores, cuando en la respuesta impugnada informó que fueron 102 (ciento dos convivencias en el Centro ubicado en Plaza Juárez), 235 (doscientos treinta y cinco) en el Centro ubicado en Río de la Plata y 203 (doscientos tres) entregas/regreso de menores, información que evidentemente, dista en exceso con la publicada en el respectivo informe de labores. Lo mismo puede observarse en la información relativa a los años dos mil nueve y dos mil diez.

Lo anterior, de acuerdo a la información publicada por el Ente Obligado en su portal de Internet¹²³, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:

*Época: Novena Época
Registro: 186243*

¹http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/comunicados/informes_estadisticas/Informe_2008.pdf

²<http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/noticias/INFORME%20PRESIDENTE%202009.pdf>

³http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr19/A14Fr19_2010-T01-T04_InfoLabores.pdf

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO

*TipoTesis: **Tesis Aislada***

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XVI, Agosto de 2002

Materia(s): Civil

Tesis: V.3o.10 C

Pag. 1306

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "**internet**", **que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos** y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, **procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.**

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO

Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.

Conforme a lo anterior, lo dicho por el recurrente en su agravio tiene fundamento, pues en el entendido de que requirió conocer el número de convivencias y de entregas/regreso de menores programas por los jueces y magistrados y que se llevaron a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada en los días y en el horario determinado por la autoridad judicial, así como al número de éstas que fueron suspendidas y canceladas (como se desprende de lo precisado por el recurrente en la solicitud de información, a decir "Entiéndase por 'Registro' a **cada una de las convivencias y entregas que por orden judicial se programan** en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y éste **les asigna un número específico**"), la información a la que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal debió dar



acceso es la que tiene que ver con el número de programaciones de convivencias y de entregas/regreso de menores que se practicaron en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece (del uno de enero al treinta y uno de agosto), de forma similar a la información dada a conocer en los respectivos informes de labores de la Presidencia de dicho Tribunal.

Asimismo, la información relativa al número de convivencias y entregas/regreso de menores que fueron canceladas y suspendidas, así como las que están o estuvieron vigentes debe ser correspondiente y proporcional al número de convivencias y de entregas/regreso de menores programadas y que se hayan llevado a cabo en los días y en el horario determinado por la autoridad judicial competente, en términos de las disposiciones normativas citadas. Esto significa que la información proporcionada en la respuesta impugnada en lo que respecta al número de convivencias y de entregas/regreso de menores que fueron canceladas y suspendidas y las que están o estuvieron activas tampoco es correcta ni está provista de certeza jurídica, puesto que al haberse demostrado que la relativa a las convivencias y entregas/regreso de menores programadas no es la que en realidad requirió el particular, en consecuencia, la información relativa al aspecto ya descrito no es a la que el particular solicitó acceso.

Lo anterior, conlleva a determinar que la información proporcionada por el Ente Obligado en respuesta a la solicitud de información no es acorde con los principios de certeza jurídica, transparencia y veracidad previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque es distinta a la solicitada y no es relevante, integral ni verificable para el ahora recurrente, por lo cual es contraria a lo establecido en el diverso 9, fracción III del mismo ordenamiento legal, así como a lo establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual



establece que para que sea válido un acto administrativo (como lo es la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública), debe *“Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas”* y siendo el caso que, en el presente asunto el Ente recurrido entregó información distinta a la solicitada, hace que la respuesta sea incongruente y, por lo tanto, carente de uno de sus elementos de validez para tener por debidamente atendida la solicitud.

De ese modo, este Instituto no reconoce la validez y la legalidad de la respuesta impugnada y sostiene que la misma transgrede el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, al no haber tenido acceso a la información de su interés, sino a información distinta que no es acorde con lo establecido en el artículo 9, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el cual el agravio del recurrente resulta **fundado**.

Ahora bien, no pasan inadvertidas las manifestaciones del recurrente en cuanto a que la información dada por el Ente Obligado en respuesta a la solicitud de información era contraria, en términos generales, a lo que en la realidad acontecía en cada caso particular llevado a cabo en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y específicamente en las causas por las cuales era procedente suspender una convivencia o entrega/regreso de menores.

Lo anterior, por constituir apreciaciones y alegaciones subjetivas que no controvierten el acto por el cual el Ente Obligado concedió al ahora recurrente el acceso a determinada información, **resultan inoperantes y no constituyen un agravio a su derecho de acceso a datos personales**, pues tratar de impugnar hechos cotidianos y actos



practicados en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada no es un asunto que tenga que tratarse a través del medio de impugnación en materia de acceso a la información pública, pues la naturaleza de este es revisar la legalidad del acto por el cual el Ente recurrido atendió la solicitud de información y no encontrar ilegalidades en hechos, actos y acontecimientos sucedidos a diario en la práctica del régimen de visitas y convencías ante el Centro de Convivencia Familiar Supervisada.

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:

Época: Novena Época

Registro: 161001

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO

*TipoTesis: **Tesis Aislada***

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XXXIV, Septiembre de 2011

Materia(s): Común

Tesis: XVII.54 K

Pag. 2200

REVISIÓN. LAS ALEGACIONES (JUICIOS) DE VALOR MORAL NO SON MATERIA DE ESTE RECURSO, CUYA FINALIDAD ES CONTROLAR LA LEGALIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. *Las alegaciones (juicios) de valor moral no pueden ser materia de estudio en el recurso de revisión, que es un instrumento técnico a través del cual el legislador asegura el óptimo ejercicio de la función judicial; es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad es controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo. Es decir, por medio del recurso de revisión sólo se confirma, revoca o modifica el fallo y el ad quem únicamente debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un análisis adecuado de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, a la luz de los agravios y la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas, y constatar si el fallo impugnado se ajustó o no a las normas legales establecidas en la ley de la materia, si fueron valoradas correctamente las pruebas, **los planteamientos de las partes o interpretados debidamente los preceptos aplicables al caso, mas no las alegaciones.***

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO



Amparo en revisión 954/2010. Baltazar Chacón Domínguez y otra. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Teresa Zambrano Calero. Secretario: Carlos Rodolfo Palacios Reyes.

Época: Décima Época

Registro: 2002443

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO

TipoTesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3

Materia(s): Común

Tesis: XVII.1o.C.T.12 K (10a.)

Pag. 1889

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA SITUACIÓN HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como agravios contra la resolución combatida, deben referirse a un menoscabo u ofensa reales, derivados de dicha resolución, pues es ésta la que se examina a la luz de aquéllos; consecuentemente, **dichos agravios son inoperantes cuando constituyen meras consideraciones de naturaleza hipotética o subjetiva, pues éstas, por su propia índole, no pueden controvertir la indicada resolución.**

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO

Amparo en revisión 116/2012. Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretario: Amador Muñoz Torres”.

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente **modificar** la respuesta del Ente Obligado y se le ordena que emita otra en los términos siguientes:

- I. Informe al ahora recurrente el número de convivencias y de entregas/regreso de menores programadas por la autoridad judicial, así como el número de éstas que hayan sido canceladas y suspendidas y las que estén o hayan estado activas o



vigentes en el periodo requerido en el Centro de Convivencia Familiar supervisada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se **MODIFICA** la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.



SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado.



Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil trece, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

**OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO
PRESIDENTE**

**MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO
COMISIONADO CIUDADANO**

**DAVID MONDRAGÓN CENTENO
COMISIONADO CIUDADANO**

**LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA
COMISIONADO CIUDADANO**

**ALEJANDRO TORRES ROGELIO
COMISIONADO CIUDADANO**